

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 368.

En la Gaceta núm. 186 del lunes 5 del actual, se lee lo siguiente:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REALES DECRETOS.

De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en admitir las dimisiones que me han presentado de sus respectivos cargos D. Agustín de Torres Valderrama, Gobernador de la provincia de Barcelona; D. Matías Bedoya, de la de Guadalajara; y D. José López Vera, de la de Burgos; declarándoles cesantes con el haber que por clasificación les corresponda, y quedando satisfecha del celo y lealtad con que han desempeñado dichos cargos.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en declarar cesantes, con el haber que por clasificación les corresponda, á D. Miguel Rodríguez Guerra, Gobernador de la provincia de Badajoz; á D. Bernabé López Bago, que lo es de la de Ciudad Real; á D. Agustín Gómez Inguanzo, de la de Córdoba; á D. Joaquín Maximiliano Gilbert, de la de León; á D. Eugenio Reguera, de la de Lugo; á D. Manuel García

Sanchez, de la de Palencia; á D. José Oller, de la de Pontevedra; á D. Francisco Páez de la Cadena, de la de Teruel; á D. Crispín Jimenez Sandoval, de la de Valencia, y á D. Fernando Balboa, de la de Zaragoza.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en nombrar Gobernador de la provincia de Badajoz á D. Casimiro Huerta y Murillo; de la de Barcelona á D. Ignacio Llasera y Esteve; de la de Guadalajara á D. Pedro Celestino Argüelles; de la de León á D. Genaro Alas; de la de Lugo á D. Angel Barroeta; de la de Palencia á D. Cástor Ibañez Aldecoa; de la de Pontevedra á Don Ramon Suarez; de la de Santander á Don Cornelio Escalante; de la de Teruel á D. Fernando de los Rios y Acuña; de la de Toledo á D. Fidel de Sagarninaga; de la de Valencia á D. Antonio Mendez Vigo; de la de Zaragoza á D. Ignacio Mendez Vigo, y de la de las Baleares á D. Juan Pacheco.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que D. José María Palarea, Gobernador civil de la provincia de Santander, pase á desempeñar igual cargo á la de Córdoba.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que D. Francisco Otazu, Gobernador de la provincia de Vizcaya, pase á desempeñar igual cargo en la de Burgos.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Conformándose con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que D. José Manso y Juliol, Vizconde de Monserrat, Gobernador de la provincia de Toledo, pase á desempeñar igual cargo en la de Vizcaya.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que D. Eusebio Donoso Cortés, Gobernador electo de la provincia de las Baleares, pase á desempeñar igual cargo á la de Ciudad Real.

Dado en Palacio á 2 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REAL DECRETO.

Atendidas las razones que me ha expuesto el Teniente general D. Manuel Pavia y Laci, Marqués de Novales, vengo en admitir su dimisión del cargo de Director general de Artillería, reservándose utilizar sus servicios oportunamente.

Dado en Palacio á 3 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

Por resolución del 4 ha sido nombrado Gobernador militar de la plaza de Ibiza e Brigadier de infantería D. Ventura Luis Francés.

Por otra de la misma fecha lo ha sido igualmente el Brigadier D. Pedro Cabanera y Pastor para desempeñar el cargo de Gobernador militar de la Gran Canaria.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, á D. Luis Manresa, Director general de Correos, quedando muy satisfecha del celo é inteligencia con que ha desempeñado este cargo.

Dado en Palacio á 3 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Atendiendo á las circunstancias que concurren en D. Mauricio Lopez Roberts, vengo en nombrarle Director general de Correos.

Dado en Palacio á 3 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, á D. Vicente Díez Canseco, Oficial de la clase de segundos del Ministerio de la Gobernación, quedando satisfecha del celo é inteligencia con que ha desempeñado este destino.

Dado en Palacio á 3 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 10 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 369.

En la Gaceta de Madrid número 187 del martes 6 de julio se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias especiales que concurren en el Capitan general de Ejército D. Francisco Serrano y Domínguez, vengo en nombrarle Director general de Artillería.

Dado en Palacio á 5 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REALES DECRETOS.

De conformidad con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en disponer que D. Hilarion del Rey, Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino, vuelva á la situación de jubilado en que se hallaba cuando le fué conferido dicho cargo, con el haber que por clasificación le corresponda, quedando muy satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 5 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

En atención á los particulares circunstancias que concurren en D. Francisco Santa Cruz, Ministro que ha sido de Hacienda, y de conformidad con el parecer del Consejo de Ministros, Vengo en nombrarle Presidente en comisión del Tribunal de cuentas del Reino.

Dado en Palacio á 5 de julio de 1838.
—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

En atención á las circunstancias que concurren en D. Miguel Roda, Ministro que ha sido de Fomento, Vengo en nombrarle Director general, Presidente en comisión de la Junta de la Deuda pública.

Dado en Palacio á 5 de julio de 1838.
—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

Vengo en nombrar Oficial de la clase de segundos del Ministerio de la Gobernación á D. Francisco Barca, cesante de la de terceros de dicho Ministerio.

Dado en Palacio á 3 de julio de 1838.
—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 30 de junio de 1838, en el pleito que ante Nos pende por recurso de casación, según lo en el Juzgado de primera instancia de Valdeorras y en la Audiencia de la Coruña entre Doña Josefa Fernandez de los Rios, viuda de D. Lorenzo Ber, vecina de S. Miguel de Reimante, y D. Manuel Suarez Deza, como marido de Doña Ramona Fernandez de los Rios, sobre mejor derecho á la herencia del difunto Don Francisco Fernandez de los Rios, Abad párroco de la parroquia de San Julian de Portela:

Resultando que este falleció en 20 de marzo de 1834, y en 7 de mayo del mismo presentó escrito en el indicado Juzgado D. Ramon Fernandez de los Rios, su padre, solicitando se procediese al inventario de los bienes de aquel, y se mandase que Doña Ramona Fernandez de los Rios, que habia vivido en su compañía, los manifestase, porque se consideraba su heredero abintestato, para lo cual acompañó las partidas de bautismo y exhumación de su hijo:

Resultando que hecha saber esta solicitud á la Doña Ramona, y compareciendo su marido D. Manuel Suarez, precedido un incidente sobre el inventario, se mandó que el indicado D. Ramon Fernandez propusiese la demanda que estimase conveniente, lo que no pudo verificar por su fallecimiento:

Resultando que en 16 de junio de 1834 Doña Josefa Fernandez de los Rios, nieta de D. Ramon, compareció en el Juzgado, y haciendo una reseña del fallecimiento de su tío D. Francisco y del D. Ramon, su abuelo, y haber quedado tres hijos y cuatro nietos, herederos de este, y como tales abintestato de aquel y bajo protesta de repartir la herencia entre sus coherederos, propuso demanda para que se lo declarase de mejor derecho á la herencia de D. Francisco Fernandez de los Rios, y sin derecho alguno á ella á Doña Ramona Fernandez, y que se mandase que esta se entregase todos los bienes del difunto presbítero:

Resultando que Suarez, evacuando el traslado conferido, solicitó que se desestimase la demanda y se declarase á su consorte única heredera de aquel, pues de la partida de bautismo que acompañaba,

su fecha 17 de abril de 1825, resultaba que fue bautizada, como hija del mismo D. Francisco y de Josefa Rias; ambos de estado solteros, que lo mismo se confirmaba por una escritura de 26 de febrero de 1849, pues en ella el mismo don Francisco reconocía y confesaba que la Doña Ramona era hija suya natural, y en este concepto la llamaba á su sucesión sin que ningún pariente pudiera perturbarla en el legítimo derecho que exclusivamente le correspondía; que de otra escritura otorgada en el mismo día que la anterior entre D. Francisco y su hija Doña Ramona de una parte, y de otra Suarez, constaba que aquel dio licencia á su hija para contraer matrimonio con este ofreciéndola, para cuando se verificase, 60,000 rs., además de varias alhajas de plata y ropas de casa, instituyéndola nuevamente heredera de todos sus bienes para despues de su muerte:

Resultando que Doña Josefa, en el escrito de réplica, alegó la falsedad de la partida de bautismo presentada, y para justificarla hizo una detenida relación del estado de los libros de la parroquia de Asturises, en donde se supone fué bautizada Doña Ramona procurando demostrar que el presbítero D. Francisco acudió al medio de que el Vicario de dicha parroquia le permitiese ingerir aquella partida entre las del año de 1825, cuando fué bautizada en 1826, y deduciendo que la Doña Ramona era hija sacrilega del D. Francisco por haber sido procreada cuando estaba este ordenado en sacris desde 25 de marzo de 1825, según se acreditaba por un testimonio presentado en autos por Doña Josefa, y que aunque fuese hija natural, no habia institución de heredera, porque constando solo esta circunstancia de las escrituras de que se ha hecho mérito era evidente que, según la ley 7.ª, tit. 3.ª, Partida 6.ª, la institución hecha de esta manera no valia, no siendo ni aun suficiente la hecha en codicilo; que valdrian en todo caso como donación mortis causa, pero no como institución de herencia, y que faltando esta, el presbítero don Francisco habia muerto intestado, debiendo ser su heredero su padre D. Ramon, que le sobrevivió, y por fallecimiento de este, la Doña Josefa y sus hermanas y tíos, sin que pudiese percibir cosa alguna la Doña Ramona, por prohibirlo las leyes 4.ª y 5.ª, tit. 20, lib. 10, de la Novísima Recopilación:

Resultando que al evacuar el traslado Suarez negó que su consorte fuese hija sacrilega y si natural, según se deducía de los documentos presentados:

Resultando que, recibido el pleito á prueba, por parte de Doña Josefa se presentaron dos testamentos de D. Ramon Fernandez de los Rios, que ninguna relación tienen con la actual cuestión; que igualmente presentó otro testimonio librado en 8 de abril de 1834 con referencia al libro de bautismos de la parroquia de Asturises, que principia en el año 1774, del que resultan un sinnúmero de inexactitudes en el orden y fecha de las partidas y aun en la foliatura, y especialmente, como mas importantes é influyentes en la actual cuestión, la partida de bautismo de Doña Ramona, celebrada, al parecer, en 17 de abril de 1825 en un claro que habia al principio de la llana antes de la de 24 de octubre del mismo año; 10 partidas de fecha posterior á la de 17 de abril y que quedaban detras de esta en el libro, y sus fechas estaban raspadas y enmendadas sin salvarse y escritas de la letra del cura don Julian Fernandez de los Rios, tío de don Francisco, excepto la de Doña Ramona, que era diferente, y era diminuta para que cegiera en aquel estrecho y al parecer del mismo D. Francisco, raspándose completamente otra entre la de 25 de marzo y 18 de agosto de 1826, que se supone ser la verdadera del bautismo de Doña Ramona, por ser la época en que se cree haber nacido ésta:

Resultando que la misma Doña Josefa se retiró la confrontación del testimonio con el libro de bautismo, con especificación de las circunstancias indicadas, y especialmente de las claras al principio de las hojas, de cuya confrontación resultó su conformidad, y que la letra de la partida de bautismo de Doña Ramona estaba limpia y tersa:

Resultando que Doña Josefa intentó probar, por medio de testigos, que Doña Ramona habia nacido entre el 25 de marzo y 18 de agosto de 1826, y que fué bautizada por D. Agustin Godas, y no se verificó la prueba por haberse promovido la cuestión de si podrian presentarse las deposiciones de los testigos los Procuradores de las partes, á que se opuso Doña Josefa, no conviniéndose en la resolución del Juez para que pudiesen presentarla, y retiró la suya protestando la nulidad de la prueba:

Resultando que Suarez justificó, por medio de 25 testigos, que su consorte, comprendida en la partida bautismal presentada, fué realmente bautizada en la época que en ella se indica, como nacida entónces, y que por lo mismo fué siempre habida y reputada, en concepto de hija natural del presbítero D. Francisco Fernandez de los Rios:

Resultando que el Juez de primera instancia, por su definitivo de 3 de febrero de 57, declaró á la Doña Ramona hija natural del indicado D. Francisco, y su única heredera, y la Audiencia de la Coruña, en su sentencia de vista de 12 de setiembre del mismo, declaró igualmente que los bienes de la herencia de D. Francisco, contenidos en las escrituras citadas que la dejó su padre natural, pertenecian á Doña Ramona, y en su consecuencia absolvía á la misma de la demanda de Doña Josefa, añadiendo que en lo que esta sentencia fuere conforme con la de primera instancia se confirmaba, y en lo que no se revocaba:

Resultando que de ella interpuso el actual recurso de casación Doña Josefa Fernandez fundándolo en que la ley 5.ª, tit. 22, Partida 3.ª, y el art. 61 de la de Enjuiciamiento civil sancionaban el principio de que la sentencia habia de ser enteramente conforme con la demanda y las pretensiones de las partes; que en este pleito la demanda de Doña Josefa conducía á que declarándola heredera abintestato de D. Francisco Fernandez de los Rios en union con sus hermanos y tíos, se condenase á Doña Ramona y su marido á hacerle suelta y dejacion de toda la herencia inventariada de aquel con frutos, que á su vez Suarez pidió que se declarase á su consorte única y legítima heredera del mismo D. Francisco como su hija natural instituida por el mismo; en su consecuencia que se la absolviera de la demanda, y la sentencia de vista no resolvía ninguna de las dos cuestiones, limitándose á hablar de los bienes contenidos en las dos escrituras de 26 de febrero de 1849, y por lo mismo contrariaba lo dispuesto en la ley 1.ª del tit. y Partidas citadas, que según estas mismas leyes la sentencia debia ser dada sobre cosa cierta, cualidad que le faltaba á la actual, porque en las escrituras no se especifica los bienes, y en que parte de ellos la nombraba heredera cuando la hija natural solo podia llevar la sexta parte, sobre lo cual tampoco resolvía la sentencia, ni si la Doña Ramona era hija sacrilega ó natural; pues en el primer caso se habian infringido las leyes 4.ª y 5.ª, tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación, y si la escritura se consideraba como un testamento, no siendo uno de los testigos vecino del pueblo del otorgamiento, se habia infringido la ley 1.ª, tit. 18 del mismo libro 10 de la Novísima Recopilación:

Resultando que el recurrente, al devolver los autos en este Tribunal Supremo, instruido su letrado, citó además como infringidas las leyes siguientes: la 6.ª y 7.ª, tit. 3.ª, partida 6.ª, las 1.ª, 8.ª y

9.ª, título 15 de la misma partida, y la 14, tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación:

—Visto: siendo Ponente el Ministro don Jorge Gisbert:

Considerando que la sentencia de la Sala primera de la Real Audiencia de la Coruña no ha contrariado la ley 5.ª, título 22, partida 3.ª, ni el art. 61 de la de Enjuiciamiento civil, porque atribuyendo á D. Francisco Fernandez de los Rios el carácter de padre natural de Doña Ramona, ha declarado virtualmente que ésta es hija suya con igual calidad, porque ha declarado también los bienes que le pertenecen, y porque la ha absuelto de la demanda de Doña Josefa sin fundación, que es lo que exige la ley citada por estas palabras, «et señaladamente debe de ser escrito en él (el juicio ó sentencia) como quita ó condena al demandado en toda la demanda ó en cierta parte de ella,» así como el art. 61 de la de Enjuiciamiento previene que se declare, se condene ó se absuelva de la demanda con palabras claras, y en la sentencia se ha hecho lo primero y lo último con la misma locución del artículo pronunciando una completa absolución:

Considerando que tampoco se ha infringido la ley 16 del mismo tit. y Partida, porque no se ha dado juicio sobre cosa que no se haya demandado, y porque, según la misma ley, es válida la sentencia en que se absuelve de la demanda, aun cuando no se use de esta fórmula, con tal que de las palabras del fallo se entienda ciertamente que el demandado es quito de ella; y en el caso presente es tan cierta esta inteligencia, como que se usa explícitamente de aquella fórmula.

Considerando, además, que la sentencia ha resuelto lo que era objeto del pleito, y que se ha dado sobre cosa cierta; pues declarándose en ella que pertenecen á Doña Ramona todos los bienes de que se hace mención en la escritura de 26 de febrero de 1849, y habiéndosele ofrecido en esta clara y terminantemente la herencia de su padre, es cierto y conocido sobre lo que se ha dado la sentencia y que se la ha declarado heredera, confirmando esta apreciación con la absolución de la demanda en que Doña Josefa pedia terminantemente que aquella declaración se hiciese en su favor:

Considerando que no se ha infringido la ley 1.ª, tit. 18, libro 10 de la Novísima Recopilación, porque en la sentencia no se ha declarado á Doña Ramona heredera de su padre por testamento, ni se ha calificado de tal la escritura mencionada de 26 de febrero de 1849, sino que se ha decidido la pertenencia de los bienes comprendidos en ella ó sea la herencia por efecto de la obligación contraída en la misma escritura al reconocerla por su hija natural y al prevenir que ningún pariente pudiera perturbarla en el legítimo derecho que exclusivamente le correspondia, obligación corroborada mas y mas por la otra escritura de la misma fecha, en la que por medio de un contrato oneroso se imposibilitó Don Francisco para disponer de sus bienes en favor de otra persona:

Considerando que este contrato no ha podido menos de tener cumplimiento, ya por la indisolubilidad de las obligaciones contraídas á su consecuencia, ya por que teniendo D. Francisco Fernandez de los Rios facultad para disponer de sus bienes, según fuese su voluntad, no haciéndolo en contravención á las leyes, y no reprobando estas la promesa solemne consignada en la escritura en que autorizó á su hija para contraer matrimonio, quedó eficazmente obligado á instituirle heredera si otorgaba testamento, y daba derecho á Doña Ramona para serlo en caso contrario; ya, en fin, porque, no siendo el referido contrato de 26 de febrero de 1849 de los reprobados por derecho, produjo una obligación de

inmediato cumplimiento, según la ley 1.^a del libro 10.^o de la Novísima Recopilación, y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo.

Considerando que la infracción de las leyes 4.^a y 5.^a del libro 10.^o de la Novísima Recopilación supondría en Doña Ramona Fernandez de los Rios la calidad de hija, sacrilega, y que apreciando la Sala primera de la Audiencia de la Coruña, según las pruebas suministradas y en uso de sus atribuciones, que no resulta justificada dicha calidad, no ha podido cometerse aquella infracción:

Considerando, por último, que de los fundamentos consignados en esta sentencia se deduce que tampoco se han cometido las demás infracciones alegadas en el escrito de ampliación en este Tribunal Supremo:

Fallamos, que debemos declarar y decretar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por Doña Josefa Fernandez de los Rios, á la que condenamos en las costas del mismo, que satisfará cuando llegue á mejor fortuna.

Y por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las correspondientes copias certificadas, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—El Marqués de Gerona.—Sebastián González Nandín.—Jorge Gisbert.—Miguel Osca.—Antero de Echazgi.—Fernando Calderón Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicación.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Señor D. Jorge Gisbert, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública en la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico.

Madrid 30 de junio de 1858.—Juan de Dios Rubio.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense julio 10 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 370.

En la Gaceta de Madrid número 188 correspondiente al día 7 del actual se halla inserto lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

Conformándose con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en mandar lo siguiente:

Artículo 1.^o Se procederá en todas las provincias del reino á la rectificación de las listas electorales para el nombramiento de Diputados á Cortes en la forma que determina la ley de 18 de marzo de 1846.

Art. 2.^o Las listas ultimadas en 15 de diciembre último se considerarán como de primera rectificación, y se expondrán al público el día 15 del presente mes, acompañadas de las dos relaciones que expresan el párrafo segundo, art. 22 de la ley, en las que consten los nombres de los electores inscritos en las listas ultimadas el 15 de mayo de 1854, que no figuren en las actuales, así como los incluidos en estas que no lo estuvieron en aquellas.

Art. 3.^o Hasta el 31 del corriente mes inclusive se recibirán por el Gobernador de la provincia las reclamaciones á que se refiere el art. 23 de la ley.

Art. 4.^o El Gobernador dispondrá que por las oficinas de Hacienda y alcaldes de los pueblos se faciliten las certificaciones que se les pidan para fundar dichas reclamaciones.

Art. 5.^o En los diez primeros días de agosto publicará el Gobernador en el

Boletín oficial la relación de las personas cuya exclusión ó inclusión se hubiese reclamado, expresando el nombre y domicilio de cada una y las razones en que se funden las reclamaciones que contra ellas se hubieren presentado.

Art. 6.^o Las instancias que se dirijan al Gobernador para sostener ó impugnar el derecho electoral, conforme al artículo 27 de la ley, se presentarán precisamente antes del día 27 de agosto. Pasado este término, no se admitirá instancia ni reclamación alguna.

Art. 7.^o El Gobernador, oyendo al Consejo provincial, resolverá sobre todas las reclamaciones é instancias que se le haya presentado, y hará imprimir para el 10 de setiembre las listas de segunda rectificación, publicándolas en la forma que previene el art. 29 de la ley.

Art. 8.^o Los recursos á la Audiencia, de que hablan los artículos 50 y 51 de la ley, podrán interponerse hasta el día 25 de setiembre inclusive. Las Audiencias devolverán los expedientes al Gobernador antes del día 10 de octubre con las sentencias que hubieren recaído.

Art. 9.^o El Gobernador declarará ultimadas las listas el día 20 del propio mes, sin perjuicio de llevar á efecto en todo caso los fallos dictados por las Audiencias en los recursos que ante ellas se hubiesen interpuesto.

Art. 10. En las Islas Baleares y Canarias principiarán á regir las disposiciones del presente decreto cinco días después que se reciba por aquellas Autoridades la correspondencia oficial.

Art. 11. Las disposiciones de la ley electoral, relativas á la rectificación de las listas, se observarán escrupulosamente en todo lo que no estuvieren modificadas por el presente decreto.

Art. 12. Las listas que ahora se rectifiquen, regirán durante el bienio que terminará el 15 de mayo de 1860. La rectificación de las que deban regir en el bienio siguiente, se principiará en diciembre de 1859.

Dado en Palacio á 6 de julio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Dirección general de Gobierno. Negociado 1.^o—Circular.

V. S. habrá visto por el Real decreto de esta fecha, que manda proceder á la rectificación de las listas electorales, cuál es el pensamiento del Gobierno de S. M. al adoptar esta medida. Depurar escrupulosamente el censo electoral; impedir la reproducción de abusos deplorables que le han falseado, y facilitar en la elección de Diputados á Cortes el libre ejercicio del derecho y la legítima y genuina representación de la opinión y de la voluntad de los electores.

Para coadyuvar dignamente á estos fines no debe V. S. perdonar medio alguno, cuidando de que por todos sus dependientes y subordinados se proporcionen instantáneamente cuantos documentos, datos y noticias se necesiten para fundar y comprobar las reclamaciones que se promuevan.

Debe V. S. proponerse por norma de su conducta en este asunto la mas estricta imparcialidad, una actividad incansable y el celo mas esquisito y perseverante; en el concepto de que el Gobierno no disimulará la mas leve falta en este importantísimo servicio, y se halla dispuesto á no negar ninguna de las autorizaciones que sean precisas para dejar espedita la acción de los tribunales contra toda clase de funcionarios públicos que por sus actos dieren ocasión á procedimientos criminales.

El Gobierno espera, y yo confío, no tener el sentimiento de que llegue este caso en ninguna provincia; antes bien, ergo que en todas hallará motivos de satisfacción por la manera con que V. S. sabrá secundar su pensamiento; en tal concep-

to, y para facilitar su mas acertada y uniforme ejecución, he creído oportuno formular con este objeto las siguientes reglas:

1.^a Con la lista de primera rectificación, que se publicará por orden alfabético de distritos, secciones, ayuntamientos y personas durante los 15 días señalados en la ley para que puedan hacerse las reclamaciones de inclusión ó de exclusión, acompañarán los Gobernadores listas de los contribuyentes, también por orden alfabético, hasta la cuota que señala el art. 17, con arreglo á los datos que obren en las oficinas de Hacienda, cuidando de que haya la mayor exactitud en la publicación de las cuotas individuales.

2.^a Los Administradores de Hacienda pública, los Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento, expedirán cuantas certificaciones se les pidan á fin de documentar las reclamaciones que se interpongan, según lo establecido en la ley electoral, facilitando estos documentos á los interesados sin demora ni dilación bajo pretexto alguno, y se les exigirá la responsabilidad en que incurran, conforme á lo dispuesto en el Código penal, por las faltas que puedan cometer en este importante servicio.

3.^a Cuando los Gobernadores tengan queja ó sospecha fundada de que se falta al cumplimiento de lo prescrito en el artículo anterior, dispondrán que se gire una visita á los Ayuntamientos ó oficinas en que se cometan estos abusos, valiéndose al efecto de los oficiales del Gobierno de provincia, alcaldes de los pueblos inmediatos, jueces de primera instancia ó promotores fiscales de partido, los cuales examinarán y comprobarán las certificaciones y documentos que deban expedirse, formando en su caso el oportuno expediente justificativo, para darle el curso que corresponda.

4.^a Los contribuyentes que lo sean en diferentes pueblos ó Ayuntamientos de una misma provincia, lo manifestarán al Administrador de Hacienda pública para que tenga presente esta circunstancia al expedirles el competente certificado. Estos funcionarios tendrán obligación de dar recibo á los interesados que lo pidieren de las solicitudes que se presenten con el objeto expresado.

5.^a Cuando los contribuyentes lo sean en diferentes provincias, y quieran acumular sus cuotas para los efectos de la ley, podrán solicitar que el Gobernador por conducto del que desempeñe igual cargo donde figure el interesado como contribuyente, obtenga certificación de la cuota que en ella satisfaga por contribución directa. Los gobernadores consagrarán á este servicio una atención preferente y darán también recibo, cuando se pida, de las instancias que se les dirijan en la forma anteriormente prescrita.

6.^a Cuando los interesados lo soliciten se les facilitará certificación literal de los acuerdos del consejo provincial relativos á las reclamaciones de que se trata.

7.^a Los gobernadores, no solamente facilitarán á los electores todos los datos que reunan las oficinas de Hacienda y demas dependientes de su autoridad, sino que los escitarán sin distinción de partidos á que reclamen las inclusiones ó exclusiones que procedan con arreglo á la ley.

8.^a Los gobernadores, al remitir á las reales audiencias los expedientes de que habla el art. 51 de la ley, pondrán en ellos certificación de los documentos que contienen y de no existir otros en la oficina de su cargo ni haberlos reclamado los interesados. Podrán estos solicitar que se les exhiba el expediente y hacer por escrito las observaciones que estimen oportunas.

9.^a Los gobernadores de provincia harán formar por orden cronológico un extracto abreviado del expediente electoral de cada distrito, y este extracto se

estenderá en un cuaderno formado á pliego metido, debiendo numerar correlativamente y rubricar por sí todas las hojas el mismo gobernador.

De Real orden lo digo á V. S. para su puntual y exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de julio de 1858.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de....

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento de los Alcaldes de la provincia, á quienes advierto que este Gobierno se ocupa sin levantar mano en los trabajos que se le encomiendan por las disposiciones anteriores, y que oportunamente serán remitidas á los distritos respectivos las listas y demas documentos que se previenen; sin perjuicio de que los Alcaldes den cumplimiento por su parte y bajo su responsabilidad mas estrecha á las obligaciones que les incumben. Orense julio 10 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 371.

En la Gaceta número 185 del domingo 4 de julio se lee lo siguiente:

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO REAL.

Real decreto.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que ante mi Consejo Real pende en primera y única instancia entre partes, de la una D. Ramon la Guardia y Larrumbe, vecino de Murcia, registrador de la mina Camello, representado por el Licenciado D. Juan Perez Sanmillan, demandante, y de la otra la Administración general del Estado, demandada, y mi Fiscal en su representación, sobre subsistencia ó revocación de la Real orden de 5 de mayo de 1857 por la que se anuló el expediente de la mina Camello y se mandó que siguiese su curso el de Santa Rosa:

Visto:

Vistos los expedientes Camello, Santo Domingo de Guzman y Santa Rosa, de los cuales resulta:

Que en 16 de noviembre de 1850 hizo Don Ramon la Guardia solicitud de registro de una mina con el nombre de el Camello, en el sitio llamado Puntal de la mina colorada, barranco de los Coscones, distrito municipal de Lorca, provincia de Murcia:

Que en 18 de los mismos pasó á informe de los Ingenieros del ramo:

Que en 14 de febrero de 1851 solicitó Don Antonio Picolo el registro de otra mina en el mismo sitio con el nombre de Santo Domingo de Guzman:

Que con decreto de la misma fecha pasó á informe del Ingeniero, que le evacuó en 1.^o de junio, diciendo que se hallaba descubierto en diferentes calcatas mineral igual á las muestras presentadas:

Que en exposición de 2 de junio se opuso la Guardia al registro Santo Domingo, fundándose en que ocupaba el terreno del suyo:

Que por decreto del mismo día pasó esta solicitud á informe del Ingeniero, que le evacuó en 10 de setiembre, diciendo que este terreno era el mismo que el de el Camello, cuyo registrador se opuso al practicarse el reconocimiento, y que existía terreno franco para una pertenencia:

Que en vista de este informe revocaron el mismo día dos decretos, anulándose por el primero el registro Santo Domingo,

y admitiéndose por el segundo el de el Camello: Que en exposición de 8 de octubre de 1851 pidió D. Ramon la Guardia que se le admitiese la designación en esta forma: desde la boca-mina 50 varas á Levante, 250 á Poniente, 60 al Mediodía y 40 al Norte: por un otrosí pidió que se practicase el segundo reconocimiento y demarcación, pues ya tenía habilitada la labor legal:

Que por decreto de la misma fecha se le admitió la designación sin dictarse providencia respecto á la demarcación:

Que en 2 de febrero de 1855 hizo Don Diego Lopez Muñoz solicitud de registro en el mismo terreno con el nombre de Santa Rosa:

Que pasada esta instancia á informe del Ingeniero, le evacuó en 25 de mayo, diciendo que había terreno franco para la concesión en el caso de que se declarase la caducidad de las minas el Camello y Revolución:

Que en exposición de 24 de abril de 1855 solicitó D. Cristóbal Abadié, apoderado de Lopez Muñoz, que se declarase la nulidad del expediente el Camello por haber dejado pasar mas de tres años desde la concesión sin haber practicado la demarcación:

Que por decreto de 30 de los mismos acordó el Gobernador no haber lugar á la caducidad de la mina el Camello, y mandó que pasase la solicitud á informe del Ingeniero para que examinase si en el terreno de el Camello no existe otra labor que la legal, demarcándola en caso que hubiese otros trabajos:

Que en 25 de mayo de 1855 manifestó el Ingeniero que había suspendido la demarcación de el Camello por haber encontrado sobre el terreno:

Primero. La labor legal de el Camello que consiste en una galería de 14 metros.

Segundo. Otra galería de 16 metros practicada por el registrador de Santa Rosa:

Tercero. Una tramada que tiene 20 metros.

Cuarto. Otra de seis metros.

Quinto. Un pozo y tramada de mucha longitud, que no pudo medirse.

Y por último, varias calicatas:

Que á excepcion de los dos primeros trabajos, los demás están ejecutados por otros mineros el año de 1840:

Que en informe de la misma fecha manifestó que el registrador de Santa Rosa tenía habilitada la labor legal, y que había terreno para una demarcación en el caso de declararse la caducidad de el Camello y Revolución:

Que en 6 de mayo de 1855 había solicitado D. Cristóbal Abadié que se uniese el expediente gubernativo de la mina el Camello, por haber dejado de identificar el punto de partida:

Que D. Ramon la Guardia, en instancia de 28 de mayo, á la que acompaña un testimonio, del que aparece, que protestó la suspensión de la demarcación, pide que pase nuevamente al Ingeniero el expediente para que demarque la mina, sirviendo de punto de partida la labor primera que indica en su informe de 25 de mayo, toda vez que está identificada la labor legal:

Que por decreto de 20 de junio mandó el Gobernador que pasase el expediente al Ingeniero para que practicase la demarcación:

Que en 6 de junio de 1855 pidió de nuevo Abadié que se declarase nulo el expediente de el Camello, porque no tenía practicada la labor legal:

Que para probar la falta de labor legal presentadas informaciones; una de cinco testigos y otra de siete; de cuyas declaraciones resulta, que la labor legal llamada el Camello fué abierta en 1851 por Don Antonio Jimenez Dotes con el nombre de Santo Domingo de Guzman, sin que ninguna de las labores que existían sobre

aquel terreno se hubiesen practicado por Don Ramon la Guardia.

Que en exposición de 4 y 17 de julio expuso Abadié que la Guardia dió aviso de estar verificada la labor legal por medio de un otrosí, cosa fuera de práctica; siendo de notar que en el decreto de admisión solo hace referencia á la parte relativa á la designación; y pide que se suspenda la demarcación de el Camello:

Que en 20 de setiembre de 1855, conformándose el Gobernador con el informe evacuado por la Diputación provincial en 29 de julio, declaró la caducidad del expediente el Camello y mandó que continuara su curso el de Santa Rosa, fundándose en los defectos de la designación de el Camello, pues que aquella no se ajustó á lo dispuesto en el art. 47 del reglamento de minería, y esta aparece en el escrito de designación por medio de un otrosí y sin que á ella se decretara; y en que el depósito que debía hacerse al pedir la demarcación, no se verificó hasta mas de tres años después:

Que en 17 de octubre de 1855, en vista del informe del Ingeniero y de la caducidad de el Camello, decretada en 20 de setiembre último, se admitió la solicitud de registro de Santa Rosa:

Que en 24 de los mismos se opuso la Guardia á la admisión de este registro, y pidió que quedase paralizado el curso del expediente hasta que se resolviera por la Superioridad:

Que en 5 de noviembre de 1855 presentó Lopez Muñoz, registrador de Santa Rosa, un escrito de designación que le fué admitido el mismo día:

Que en exposición de 17 de los mismos pidió la Guardia que se librase certificación de los expedientes Santo Domingo de Guzman, Santa Rosa y el Camello, y de las fechas en que se verificaron su depósito y el de Lopez Muñoz:

Que por decreto del mismo día se mandó librar la certificación solicitada:

Que resulta que el exponente hizo su depósito en 12, y Muñoz en 25 de marzo de 1855:

Que en otra exposición del mismo día pidió que se suspendiesen los trabajos en la mina Santa Rosa:

Que por decreto de 30 se concedió á la Guardia la intervención en las labores de esta mina:

Que en 28 de octubre de 1855 apeló Don Ramon la Guardia para ante el Ministro de Fomento del decreto de 2 de setiembre, y pidió que se llevase á efecto el de 20 de junio.

Que con Real orden de 8 de enero de 1856 se remitieron estos expedientes á informe del Abogado consultor del Ministerio de Fomento:

Que este le evacuó en 20 de febrero opinando que se confirmase el decreto del Gobernador de 20 de setiembre, y que se devolviesen los expedientes para que siguiese su curso el de Santa Rosa, fundándose en los artículos 13, 47 y 51 del Reglamento de minería, y en las Reales ordenes de 17 de junio y 24 de agosto de 1854; y en que el otrosí puesto al final del escrito de la designación, pidiendo la demarcación, parece puesto mucho tiempo después de fechado y firmado en lo principal, sin consignarse las dietas del Ingeniero, ni haberse proveído nada sobre aquel interesante extremo:

Que por Real orden de 13 de mayo de 1856 pasó este expediente á informe de la Sección segunda del suprimido Tribunal Supremo Contencioso-administrativo:

Que pedidos por ésta antecedentes al Gobernador de Murcia, los remitió en 17 de setiembre, manifestando que el registrador de el Camello había tardado mucho en consignar las dietas del Ingeniero, por cuya razón no pudo tener lugar antes la demarcación:

Que en el Diario de minas aparece el extracto de una solicitud presentada en 8 de octubre de 1851, que dice: «Don Ramon la Guardia designa la mina Camello y pide la demarcación», notándose que

las palabras pide la demarcación parecen adicionadas y de tinta diferente:

Que por Real orden de 3 de octubre de 1856 se pasó este expediente á informe de la Sección de Fomento del Consejo Real:

Que esta le evacuó en 5 de diciembre, diciendo que no constaba que se hubiese anunciado al público el registro Santa Rosa, ni que se hiciese saber en forma al registrador de el Camello, por lo que debía preguntarse al Gobernador de Murcia si tuvieron lugar estas diligencias:

Que el Gobernador manifestó en 31 de diciembre que el registro Santa Rosa se anunció en el Boletín correspondiente al 21 de julio de 1853, no habiéndose notificado á la Guardia por no ser necesario:

Que devuelto este expediente con Real orden de 13 de enero de 1857 á informe de la Sección de Fomento del Consejo Real, dijo en 27 de febrero, que Don Ramon la Guardia tiene derecho de preferencia á la mina, y que debe reponerse este expediente al estado que tenía en 20 de junio de 1855 para que se lleve á efecto la demarcación de el Camello, según dispuso el Gobernador por decreto de aquel día; porque además de ser este registro mas antiguo, no había penas para los morosos en hacer el depósito antes de las Reales ordenes de 26 de enero y 6 de febrero de 1857:

Que por Real orden de 10 de marzo, teniendo presente que el otrosí puesto en el escrito de designación, pidiendo la demarcación, se diferencia bastante del escrito, y que no se hace mención de él en el decreto marginal, se devolvió el expediente al Gobernador de Murcia á fin de que practicase las diligencias oportunas para averiguar si dicho otrosí había sido escrito por el mismo que hizo la solicitud que le precede; si lo fué al mismo tiempo y si se tuvo presente al decretar sobre la designación:

Que el Gobernador devolvió en 6 de abril de 57 el expediente con las diligencias practicadas por maestros calígrafos, de las que resulta, que las letras de la solicitud de designación y del otrosí pidiendo la demarcación, no están hechas por la misma mano:

Que en el asiento del libro de registro correspondiente á esta solicitud hay una raspadura y sobre ella escrito D. Ramon la Guardia presenta, y añadido con otro corte de pluma entre dos líneas las palabras la demarcación:

Que en vista de este informe recayó la Real orden de 5 de mayo, por la que, confirmando el decreto del Gobernador de Murcia, se dispuso que quedase anulado el expediente de el Camello y siguiese su curso el de Santa Rosa:

Vista la demanda presentada en 3 de junio de 1857 por el licenciado D. Juan Perez Samillán á nombre de D. Ramon la Guardia, pidiendo que quedase sin efecto en todas sus partes la anterior Real orden:

Vista la contestación de mi Fiscal, pidiendo la validez y subsistencia de dicha Real orden, contra la que se reclama en la demanda:

Vistas las informaciones de testigos practicadas por Lopez Muñoz, de las que resulta que la labor legal llamada el Camello fué abierta en 1851 por D. Antonio Jimenez Dotes con el nombre de Santo Domingo de Guzman, y que ninguna de las que existen sobre aquel terreno ha sido verificada por D. Ramon la Guardia:

Visto el informe evacuado en 29 de julio de 1855 por la Diputación provincial de Murcia, extendiendo que debía declararse la nulidad del expediente el Camello y continuar su curso el de Santa Rosa por los defectos que había en la demarcación y designación de aquel:

Visto el informe del Abogado consultor del Ministerio de Fomento, conforme con el dictamen de la Diputación provincial:

Vistas las diligencias de reconocimiento practicadas por maestros calígrafos, de las que resulta que las letras de la solicitud

de designación y del otrosí pidiendo la demarcación, no están hechas por la misma mano; y que en el asiento del libro de registro correspondiente á esta solicitud hay una raspadura, y sobre ella escrito Don Ramon la Guardia presenta, y añadido con otro corte de pluma entre dos líneas las palabras la demarcación:

Visto el art. 50 del reglamento para la ejecución de la ley de minería, que señala el término dentro del cual debe verificarse la labor legal:

Visto el art. 58 que dispone que si se verificase el reconocimiento no estuviese habilitada la labor legal, el Ingeniero suspenderá la demarcación, dando parte al Jefe político, que declarará sin efecto el expediente:

Considerando que al practicarse el segundo reconocimiento no tenía habilitada D. Ramon la Guardia la labor legal, según han declarado varios testigos examinados á instancia de Lopez Muñoz, registrador de Santa Rosa, sin que obste al convencimiento que produce esta prueba el haber dicho el Ingeniero, que encontró, además de otras labores, la legal de el Camello, que consistía en una labor de 14 metros, para cuya circunstancia solo pudo fundarse en el dicho del interesado:

Considerando que está además corroborada la prueba de no haber ejecutado Don Ramon la Guardia la labor legal, con los indicios que arroja el expediente gubernativo de haberse verificado lo respectivo al segundo reconocimiento y demarcación, con el fin sin duda de fundar en este hecho la prueba de tener cumplido el deber que la ley le imponía y que no se había llenado; siendo igualmente reparable que, al hacer la designación, no expresó el mismo la Guardia con claridad y circunstanciada mente el punto donde había comenzado la labor legal:

Considerando que D. Ramon la Guardia, según lo dispuesto en el art. 58 del reglamento, incurrió en uno de los casos que dicho artículo señala para que quede sin efecto un expediente de registro, y perdido el derecho adquirido por él:

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Francisco Martinez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel Garcia Gollardo, Don Juan Felipe Martinez Almagro, D. Saturnino Calderon Colantes, D. Florencio Rodriguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Cayetano de Zúñiga y Linarres, Don Manuel de Sierra y Moya, Don José Ruiz de Apolaca, D. Francisco Tames Hevia, D. Antonio Navarro de las Casas, Don José Antonio Olabeta, D. Antonio Escudero, D. Diego Lopez Ballesteros, Don Pedro Egaña, D. Fernando Alvarez, Don Fermín Salcedo, D. José Caveda, D. Modesto Cortazar y D. Tomás Retortillo:

Vengo en desestimar la demanda interpuesta por el licenciado D. Juan Perez á nombre de D. Ramon la Guardia y en confirmar mi Real orden de 5 de mayo de 1857, la que se lleve á efecto en todas sus partes; y lo acordado.

Dado en Aranjuez á 23 de mayo de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo Real, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique á las partes por cédula de Uger, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 5 de junio de 1858.—Juan Sunyé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 10 de julio de 1858.—El Gobernador, José Pruno de Ricera.